

045/2025**I**

El proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Suministro y Contratación de energía eléctrica tiene por objeto revisar y actualizar el marco normativo de las actividades minoristas del sector eléctrico. En particular, regula la comercialización, el suministro y la agregación de energía eléctrica, estableciendo las condiciones que rigen las relaciones entre los distintos sujetos que intervienen en este ámbito. Su finalidad última es garantizar el suministro en condiciones de transparencia, calidad y seguridad, reforzando la protección del consumidor y fomentando su participación activa en el mercado, de acuerdo con los objetivos nacionales y europeos de transición hacia un modelo energético más sostenible y eficiente.

De acuerdo con su Memoria del Análisis de Impacto Normativo —MAIN—, la razón de ser de esta nueva regulación reside en la necesidad de superar un marco jurídico fragmentado y obsoleto, cuyas disposiciones en vigor —como las contenidas en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, o en normas complementarias— fueron aprobadas en un contexto muy distinto al actual, anterior a la liberalización del sector y a la desaparición de las tarifas integrales. Ello ha generado un entramado normativo confuso, que no refleja las transformaciones experimentadas en el mercado eléctrico ni garantiza adecuadamente la seguridad jurídica. El nuevo texto persigue, por tanto, armonizar, refundir y modernizar la normativa existente, otorgando mayor coherencia y estabilidad al sistema.

La norma responde también al profundo proceso de transformación energética en curso, marcado por la transición ecológica y los compromisos de descarbonización a 2050. Se alinea expresamente con la Directiva (UE) 2019/944, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que sitúa al consumidor en el centro del sistema eléctrico y le reconoce un papel activo en la gestión de la demanda y en la participación en los mercados. En este sentido, se incorpora la figura del agregador independiente como nuevo sujeto del sistema, clave para facilitar la flexibilidad y la integración de energías renovables. Junto a ello, se refuerzan los mecanismos de protección al consumidor en cuestiones como la transparencia contractual, los procedimientos de reclamación, el cambio de comercializador y la prohibición de prácticas de contratación no solicitadas.

El texto se articula en un artículo único de aprobación del Reglamento, acompañado de ocho disposiciones adicionales, siete disposiciones

transitorias, una derogatoria y ocho disposiciones finales. Además, se incorporan tres anexos que contienen modelos de declaración responsable para consumidores directos en mercado, comercializadores y agregadores independientes.

El Reglamento consta de cuatro capítulos y cincuenta y ocho artículos. El Capítulo I recoge las disposiciones generales: objeto, ámbito de aplicación, definiciones y principios rectores del suministro, entre los que destacan la transparencia, la separación de actividades, la libertad de elección y la participación activa del consumidor. El Capítulo II se centra en el suministro de energía, regulando de forma detallada los derechos y obligaciones del consumidor, la información contractual, los procedimientos de cambio de comercializador y las garantías de continuidad del servicio. El Capítulo III introduce y regula la actividad de agregación, definiendo el estatuto jurídico de los agregadores independientes, sus obligaciones y requisitos. Finalmente, el Capítulo IV aborda aspectos relativos a la contratación, la facturación, la atención al cliente y los procedimientos de reclamación, estableciendo un marco uniforme que garantice la confianza de los usuarios.

Las disposiciones adicionales y transitorias prevén medidas de implementación y adaptación, como la adecuación de los ficheros de intercambio de información, el desarrollo de la aplicación informática para la actividad de agregación, la regulación de los indicadores de calidad de la atención al consumidor o la devolución de garantías depositadas. A su vez, las disposiciones finales y derogatoria modifican y derogan normas anteriores —como el Real Decreto 1435/2002 y el Real Decreto 1718/2012— con el fin de consolidar un marco normativo coherente y de plena seguridad jurídica.

En definitiva, el Real Decreto se configura como una norma esencial para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/944, de 5 de junio de 2019, modernizar el marco regulatorio del sector eléctrico y reforzar las garantías de los consumidores, quienes pasan a desempeñar un papel activo en un sistema eléctrico más flexible, transparente y orientado hacia la sostenibilidad.

Habida cuenta del objeto del Real Decreto que se informa, se prevé la recogida y tratamiento de un amplio conjunto de datos de carácter personal, cuyo análisis de necesidad se impone en atención a las exigencias derivadas de la normativa de protección de datos.

II

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento

General de Protección de Datos —RGPD—), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales —LOPDGDD— conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamiento de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

Entre otras definiciones, el artículo 4 del RGPD se refiere a «datos personales» como toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Y «tratamiento» como cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

Por su parte, el apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que: *“Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.”*

Pues bien, según se extrae del texto normativo que se informa, de acuerdo con lo previsto en los artículos 6, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 24, 26, 34, 54 y Anexo I del proyecto de Real Decreto, por parte de los responsables de los tratamientos —gestor de la red de transporte y distribución, operador del sistema, operador de mercado, el comercializador, agregador independiente, titular de instalación, etcétera— **se procederá al tratamiento de datos de carácter personal.**

En particular, tal y como se señala en el **artículo 6** del proyecto, uno de los objetos del mismo es regular los derechos de los consumidores de energía eléctrica, entre los que se incluye expresamente el derecho a **“ai) A la protección de los datos de carácter personal”**, señalándose en dicho precepto —*in fine*— que **“la recogida, tratamiento y traspaso de estos datos observarán en todo momento las previsiones establecidas en la**

normativa sobre protección de datos de carácter personal que resulte de aplicación”.

A este respecto, no cabe sino **sugerir** que la citada mención a la normativa sobre protección de datos explicita con claridad el sometimiento de los tratamientos de datos que se realicen a lo dispuesto tanto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos, como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. A dichos efectos, se propone la modificación del párrafo transcrito, pudiendo incorporarse en su lugar otro de igual o similar contenido que el siguiente:

“La recogida, tratamiento y traspaso de estos datos observarán en todo momento las previsiones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa sobre protección de datos de carácter personal que resulte de aplicación”.

De otra parte, para la determinación del responsable del tratamiento de los datos de carácter personal objeto del Real Decreto, ha de estarse a la definición contenida en el artículo 4.7 del RGPD, que dispone que dicha condición corresponde a “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; (...)”, siendo necesario, por tanto, concretar con carácter general en quién concurre dicha figura.

Del análisis del texto sometido a informe se desprende que la condición de responsable del tratamiento concurrirá, según el caso, en cada uno de los agentes privados a los que se ha hecho referencia anteriormente (empresas suministradoras, distribuidoras, comercializadoras, operadoras, etcétera), que son los **“sujetos”** a los que alude el artículo 6.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en cuanto **personas y entidades que desarrollan actividades destinadas al suministro de energía eléctrica.**

En lo relativo a los tratamientos de datos efectuados por las Administraciones públicas, así como por los órganos y entes públicos con competencia en la materia, la determinación del responsable debe vincularse también a lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Esta norma atribuye funciones concretas de supervisión, control y regulación a diferentes entes públicos, de las cuales se deduce su condición de responsables del tratamiento en el marco de sus respectivas competencias.

Así, en el artículo 3 de la Ley se establecen las funciones y competencias de la Administración General del Estado en materia de energía

eléctrica, complementándose su planificación en el artículo 4, que, además, especifica las competencias de las comunidades autónomas en relación con las instalaciones que no excedan su ámbito territorial.

A su vez, conforme al artículo 43 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, corresponde a la Administración General del Estado el establecimiento de las medidas de protección al consumidor que deberán recogerse en las condiciones contractuales de los contratos de suministro. El artículo 44 concreta los derechos y obligaciones de los consumidores, garantizando el acceso y conexión a las redes de transporte y distribución en las condiciones que reglamentariamente establezca el Gobierno.

Por su parte, el artículo 46 atribuye a las Comunidades Autónomas competencias en materia de autorización de instalaciones de generación, transporte y distribución cuya ubicación se sitúe íntegramente en su ámbito territorial, así como en la inspección, control y sanción de estas instalaciones, la gestión de los procedimientos de conexión y acceso, la supervisión de contratos y la tramitación de reclamaciones de los consumidores en su territorio. El artículo 47, finalmente, atribuye a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) funciones de supervisión y control del sector eléctrico, incluida la verificación del cumplimiento de la normativa de suministro y contratación, lo que la convierte en responsable del tratamiento respecto de los datos que maneja en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se atribuye al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la tramitación de procedimientos para declarar la extinción de la habilitación de los comercializadores en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

En la misma línea, la Directiva (UE) 2019/944, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, refuerza la idea de que los Estados miembros y sus autoridades reguladoras deben garantizar un mercado transparente y eficiente, asegurando al mismo tiempo la protección de los consumidores. La Directiva introduce la figura del “cliente activo” y subraya la importancia de una información accesible y veraz, lo que implica que las Administraciones competentes, los reguladores nacionales y los entes de supervisión que traten datos en este contexto deben ser considerados responsables del tratamiento en la medida en que determinen los fines y medios de dicho tratamiento.

En conclusión, a la vista de los artículos 3, 4, 43, 44, 46 y 47 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y de la Directiva (UE) 2019/944, la condición de responsables de los tratamientos en el ámbito público corresponde a la Administración General del Estado, en particular al **Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias territoriales, y a la CNMC** como organismo regulador y supervisor independiente. Todos ellos, en cuanto determinan los fines y medios del tratamiento de los datos derivados

de la aplicación del Reglamento, deben cumplir estrictamente con las obligaciones establecidas en el RGPD y la LOPDGDD, asegurando la transparencia, la licitud y la proporcionalidad de dichos tratamientos.

III

La normativa de protección de datos contempla diferentes supuestos que pueden dar lugar al tratamiento de datos de carácter personal. En concreto, de acuerdo con el **artículo 6** –“Licitud del tratamiento”-, del **RGPD**, entre otros, dicho tratamiento es lícito y legítimo cuando:

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; (La negrita es nuestra)

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

Tal y como se ha expuesto —conforme establecen los artículos 3, 4, 43, 44, 46 y 47 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico—, en el **ámbito de la gestión pública**, las competencias se ejercen a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias territoriales, y

de la CNMC como organismo regulador y supervisor independiente.

A su vez, las funciones y atribuciones conferidas a los **“sujetos” privados** que desarrollan actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, devienen a consecuencia de lo dispuesto en una norma con rango de ley formal (la Ley 24/2013, de 26 de diciembre).

Pues bien, en ambos casos, sujetos públicos y privados, las citadas previsiones normativas establecidas en una ley responden a las exigencias derivadas del artículo 8 de la LOPDGDD, cuando dispone que:

“Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con **rango de ley**, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. (La negrita es nuestra)

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con **rango de ley**.” (La negrita es nuestra)

En consecuencia, **la base de legitimación de los tratamientos derivados del proyecto que se analiza se encuentra claramente incardinada en las previsiones de las letras c) y e) del artículo 6.1 del RGPD.**

IV

En lo que respecta a la materia de protección de datos, varios artículos del Reglamento presentan una especial incidencia, lo que requiere un análisis detallado a la luz del RGPD y de la LOPDGDD.

El **artículo 8**, que regula el Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS), resulta esencial, ya que obliga a las empresas

distribuidoras a mantener actualizada una *base de datos con un conjunto relevante de información personal* y de consumo asociada a cada punto de suministro. Entre los datos que deben constar figuran el nombre y apellidos o denominación social del titular, la dirección completa, el código CUPS, el consumo agregado de los tres últimos años, la información relativa al autoconsumo, el acogimiento al bono social y la esencialidad del suministro. Asimismo, se exige a las distribuidoras contar con los sistemas informáticos necesarios para permitir la consulta de datos del SIPS y garantizar el acceso telemático gratuito, *asegurando en todo caso el cumplimiento de la normativa de protección de datos*.

Por otra parte, en el ANEXO 1 del Real Decreto que se informa, se incorpora un conjunto de datos identificativos, relativos, entre otros, al nombre y apellidos, número de NIF, identificación del representante, domicilio a efectos de notificación y dirección de correo electrónico.

En cuanto al **artículo 10**, relativo a las obligaciones del consumidor directo en mercado, la norma impone expresamente el cumplimiento de la LOPDGDD y demás normativa en materia de protección de datos, lo que debe entenderse necesariamente en conexión con el RGPD como norma de aplicación directa en la Unión Europea. En consecuencia, los consumidores directos deberán garantizar la licitud, transparencia y minimización en el tratamiento de los datos, así como el pleno respeto de los derechos de los interesados.

El **artículo 13**, que regula las obligaciones del comercializador, reitera la exigencia de cumplir con la LOPDGDD, sin mencionar explícitamente el necesario sometimiento de dichas obligaciones a las disposiciones del RGPD.

A este respecto, no cabe sino reiterar nuestra **sugerencia** de que, también en la redacción de los artículos 10 y 13 del proyecto, la mención a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, se haga —asimismo— extensiva al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos. A dichos efectos, se propone la modificación de ambos artículos, sustituyendo los párrafos afectados por otro u otros de igual o similar contenido que el siguiente:

“En todo caso, se exigirá la garantía de confidencialidad y la protección de datos referidos a las personas físicas afectadas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de seguridad y protección de datos”.

A su vez, se sugiere que dicha exigencia se haga extensiva a los

ANEXOS del Real Decreto, por cuanto a través de su cumplimentación se procederá al tratamiento de diversos tipos de datos de carácter personal.

Además, el artículo 13 del proyecto impone la obligación de recabar y conservar en soporte duradero la documentación relativa a la contratación con personas físicas, que constituye la prueba del consentimiento del consumidor. Este deber se alinea con los artículos 6 y 7 del RGPD y con el artículo 6 LOPDGDD, que exigen un consentimiento expreso, informado, verificable y revocable. La obligación de disponer de copia actualizada del documento de identificación del usuario, obtenida como máximo treinta días antes de la firma, refuerza las garantías en materia de seguridad y proporcionalidad del tratamiento.

A este respecto, se cumple con los mandatos de los citados preceptos, y, en particular del mencionado artículo 6 LOPDGDD, cuando dispone que:

“Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.
3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.”

Por su parte, el **artículo 17**, referido al intercambio de información entre comercializadores y distribuidores, establece la responsabilidad plena del comercializador respecto de la **confidencialidad** de la curva de carga de los consumidores. Dado que este dato revela hábitos y rutinas de los usuarios, debe considerarse especialmente sensible y quedar sujeto a los principios de minimización, limitación de la finalidad y proporcionalidad del artículo 5 RGPD, impidiendo cualquier uso secundario no autorizado.

Así, en la recogida y tratamiento de dichos datos deben respetarse los citados principios. A los efectos que aquí interesan, el mencionado artículo 5, en su apartado 1, se refiere a los principios de limitación de la finalidad,

minimización y exactitud, limitación del plazo de conservación, e integridad y confidencialidad:

“5.1 Los datos personales serán:
(...)

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales (**«limitación de la finalidad»**);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (**«minimización de datos»**);

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan (**«exactitud»**);

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado (**«limitación del plazo de conservación»**);

f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas (**«integridad y confidencialidad»**).”

Pues bien, de acuerdo con el artículo 17 del proyecto, el comercializador será plenamente responsable de garantizar **la confidencialidad** de la información sobre la curva de carga de sus consumidores, de acuerdo con lo establecido en la LOPDGDD y demás normativa vigente en materia de protección de datos, no pudiendo utilizar dicha información para fines ajenos a su actividad como comercializador de energía eléctrica.

Asimismo, se dispone que, en estos supuestos, el comercializador establezca los pactos y acuerdos que se puedan requerir, así como el contrato al que se refiere el artículo 28.3 del RGPD, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (contrato de encargo del tratamiento).

En este sentido, sin perjuicio del acierto en la introducción de la mención del artículo 28.3 del RGPD, en el ámbito de la necesaria confidencialidad exigida por este tipo de procesos, se sugiere la introducción de un artículo específico referido a las condiciones de confidencialidad requeridas, que resulten conformes con las previsiones del RGPD y de la LOPDGDD. A su vez, se echa en falta el establecimiento de las correspondientes medidas de seguridad referidas a los tratamientos de datos personales derivados de los citados procesos, lo que sugiere también la necesaria modificación del texto presentado a informe, procediendo a introducir en su redacción las correspondientes menciones al sometimiento y cumplimiento de las medidas de seguridad del RGPD.

De tal suerte, el artículo 17.2 —in fine— **podría adoptar la siguiente redacción u otra similar:**

“El comercializador será plenamente responsable de garantizar la confidencialidad de la información sobre la curva de carga de sus consumidores, **conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016**, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y no podrá utilizarla para fines ajenos a su actividad como comercializador de energía eléctrica, sin perjuicio de las obligaciones de información impuestas por la ley en cada momento. (la negrita es nuestra)

Dicha responsabilidad no podrá delegarse ni transferirse a terceros, sin perjuicio de que la gestión de la facturación de la energía pueda corresponder a otra entidad que no coincida jurídicamente con la titular.

En todo caso, se exigirá la garantía de confidencialidad y la protección de datos referidos a las personas físicas afectadas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de seguridad y protección de datos”.

El comercializador garantizará el cumplimiento de las medidas de seguridad del artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y 28 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, asegurando, además, la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas de acceso a datos, y adoptando las medidas que garanticen el cumplimiento de los principios del tratamiento y el deber de confidencialidad del personal con acceso a datos. (la negrita es nuestra)

Además, en estos supuestos, el comercializador habrá de establecer con dicha entidad los pactos que en cada caso se puedan requerir, así como el contrato al que se refiere el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.”

V

Por lo demás, en el Real Decreto analizado se realizan múltiples referencias al sometimiento de los tratamientos de datos a la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, en los términos recogidos por el Reglamento General de Protección de Datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En concreto, se recoge dicho sometimiento en los siguientes artículos del proyecto de Decreto:

El **artículo 19**, relativo al procedimiento de cambio de comercializador, dispone que toda la información proporcionada en este contexto deberá cumplir con la normativa de protección de datos. Ello refuerza el derecho a la portabilidad reconocido en el artículo 20 del RGPD, así como el deber de transparencia e información hacia el consumidor respecto de los destinatarios de sus datos en el marco de este procedimiento.

En lo que respecta al **artículo 22**, sobre las obligaciones del agregador independiente, se establece igualmente la obligación de cumplir con la LOPDGDD y el RGPD. En este sentido, el agregador debe ser considerado responsable del tratamiento, en los términos del artículo 4.7 del RGPD, y adoptar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la confidencialidad, integridad y seguridad de los datos tratados.

El **artículo 24**, relativo al intercambio de información entre agregadores y distribuidores, reproduce la obligación de garantizar la confidencialidad de la curva de carga, en coherencia con lo establecido en el artículo 17. Ello

refuerza la prohibición de tratamientos secundarios incompatibles con la finalidad original, salvo consentimiento expreso del interesado o concurrencia de otra base jurídica válida, y justifica que, también en relación con este artículo deba **traerse a colación idéntica fundamentación jurídica** que la expuesta en el Punto anterior en relación con los comercializadores (confidencialidad, seguridad, limitación de la finalidad, integridad, etcétera).

Por su parte, el **artículo 26**, en relación con el procedimiento de cambio de agregador independiente, establece que la información deberá cumplir con la normativa de protección de datos. Este precepto enlaza directamente con el derecho a la portabilidad del artículo 20 RGPD, asegurando la transferencia de datos sin obstáculos, bajo condiciones de seguridad, transparencia y pleno respeto al consentimiento del consumidor.

El **artículo 34**, que regula las condiciones generales del contrato de acceso de terceros a la red, exige el consentimiento expreso del consumidor para la cesión de datos al distribuidor. Este mandato debe interpretarse conforme a los artículos 6 y 7 del RGPD y al artículo 6 LOPDGDD, lo que refuerza la necesidad de acreditar un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco antes de cualquier cesión.

El **artículo 51**, sobre la reposición y reconexión del suministro en casos de cambio erróneo de comercializador, contempla expresamente la aplicación del régimen sancionador en materia de protección de datos. De este modo, los incumplimientos en la gestión de datos en estos supuestos podrán ser sancionados tanto en virtud del RGPD como de la LOPDGDD.

Finalmente, el **artículo 54**, relativo a las medidas de protección al consumidor, establece que la instalación de equipos de medida con capacidad de lectura remota deberá realizarse siempre observando la normativa en materia de protección de datos. Este mandato conecta directamente con el principio de “privacidad desde el diseño y por defecto” del artículo 25 RGPD, obligando a que la tecnología de medición inteligente incorpore garantías técnicas que minimicen la intrusión en la privacidad del usuario y aseguren un control efectivo sobre sus datos.

Según se observa, en el proyecto de Real Decreto que se analiza se echa en falta, y, por tanto, se sugiere, una referencia específica al cumplimiento de las medidas de seguridad del **artículo 32 del RGPD**, debiendo, a su vez, asegurarse la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia de los sistemas de acceso a datos. Esta exigencia también se encuentra reflejada en el **artículo 28 de la LOPDGDD**, que exige la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento de los principios del tratamiento y el deber de confidencialidad del personal con acceso a datos, por lo que la mención a dicho precepto deviene también conveniente.

En consecuencia, se sugiere la adición de un nuevo artículo o de un nuevo apartado de un artículo, con una redacción que podría incorporar el siguiente contenido u otro similar:

“El responsable del tratamiento de datos personales adoptará, en todo caso, las medidas de seguridad que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y con el artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Las medidas de seguridad a adoptar serán técnicas y organizativas y deberán garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento.”

VII

En conclusión, aunque el Reglamento reconoce y refuerza el derecho a la protección de datos en múltiples preceptos, su correcta aplicación exigirá un cumplimiento riguroso y constante de los principios del RGPD y de la LOPDGDD —minimización, limitación de la finalidad, licitud, transparencia y proporcionalidad— por parte de todos los agentes del sector eléctrico.

Por tanto, se sugiere la inclusión expresa de un precepto específico referido al sometimiento y debido cumplimiento de la normativa de protección de datos por parte de todos los actores intervinientes en los diferentes procesos que supongan la realización de tratamientos de datos de carácter personal.

Así, en primer lugar, se sugiere la modificación del **artículo 6** del Real Decreto que se informa, en los términos en los que ha quedado expuesto en el **Punto II** de este Informe.

A su vez, en relación con los **artículos 13 y 17.2** del proyecto, que contienen una mención parcial e insuficiente a la normativa de protección de datos, se sugiere la adopción de una redacción igual o similar a la propuesta en el **Punto IV** de este Informe. Idéntica propuesta se realiza en relación con el **artículo 24** del proyecto, según se ha analizado en el **Punto V**.

Por otra parte, según se expone en el **Punto VI**, se sugiere la adición de un nuevo artículo o de un nuevo apartado de un artículo, con una redacción que incorpore una mención concreta a la adopción de las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias, y la debida garantía del

nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento.